



SALA QUINTA DE DECISIÓN LABORAL

Proceso: ORDINARIO LABORAL
Radicado: 05001-31-05-012-2020-00183-01 (O2-23-123)
Demandante: PEDRO NEL RENDÓN MORALES
Demandadas: EMPRESAS VARIAS DE MEDELLÍN S.A. ESP
Procedencia: JUZGADO DOCE LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN
Asunto: DECRETO DE PRUEBAS – TESTIMONIOS

En Medellín, a los veintiocho (28) días del mes de julio del año dos mil veintitrés (2023), la **Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín**, integrada por los magistrados CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES, SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE y VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO, quien actúa como magistrado sustanciador, procede a dictar decisión de segundo grado, dentro del proceso ORDINARIO LABORAL promovido por PEDRO NEL RENDÓN MORALES en contra de EMPRESAS VARIAS DE MEDELLÍN S.A. ESP, conocido bajo el radicado único nacional 05001-31-05-012-2020-00183-01 (O2-23-123), a fin de resolver el recurso de apelación impetrado por la parte pasiva contra la decisión adoptada el 20 de abril de 2023, y mediante la cual la juzgadora de instancia negó el decreto de la prueba testimonial impetrada.

1. ANTECEDENTES

1.1 Demanda. El señor PEDRO NEL RENDÓN MORALES, actuando por intermedio de apoderada judicial, promovió demanda ordinaria laboral en contra de EMPRESAS VARIAS DE MEDELLÍN S.A. ESP- EMVARIAS-, a fin de que se declare que tiene derecho a que se le aplique la convención colectiva de trabajo suscrita entre el Sindicato de Trabajadores de las Empresas Varias Municipales de Medellín, hoy Empresas Varias de Medellín S.A. ESP, por ostentar la calidad de trabajador oficial, y en consecuencia, condenar a EMVARIAS S.A. ESP, a reconocer y pagar a favor del demandante la pensión convencional a partir del 05 de abril de 1993, con una mesada pensional inicial de \$286.572, que resulta de multiplicar un IBL de \$337.144 por una tasa de reemplazo del

85%, el retroactivo pensional, la indexación, lo ultra y extra petita, y las costas procesales.

(Fols. 1 a 11 archivo No 02).

1. 2 Trámite de Primera Instancia. El Juzgado Doce Laboral del Circuito de Medellín, en fecha 31 de agosto de 2020 (doc. 03, folio 1 a 2) emitió auto admitiendo la demanda, y ordenando la notificación a la entidad demandada, la que una vez notificada contestó la misma (Archivos No 07), oponiéndose a las pretensiones de la demanda, bajo el argumento de que no es procedente la aplicación de la convención colectiva al demandante, ya que al momento en que se le reconoció la pensión de jubilación tenía la calidad de empleado público, además de que el demandante nunca estuvo vinculado al sindicato ni tampoco se le hacían deducciones por cuotas sindicales; que la pensión reconocida lo fue con sustento en la Ley 4 de 1966 que establece el 75% de lo devengado en el último año de servicios. Como excepciones de mérito rotuló las de prescripción, inexistencia del derecho, inexistencia de la obligación, falta de causa para demandar, y buena fe de la parte demandada. Mediante auto del 24 de enero de 2022 (Fols. 1 a 2 archivo No 11), se tuvo por contestada la demanda.

1.3 Decisión de la a quo. Mediante auto del 20 de abril de 2023 (Fol. 1 a 3 archivo No 18), la a quo negó el interrogatorio de parte al demandante y la prueba testimonial solicitada por la demandada, con sustento en que se trata de un asunto que es de pleno derecho y por tanto la misma es inconducente para la solución del litigio.

1.6 Impugnación y límites del ad quem. Inconforme con la decisión de instancia, la parte demandada interpuso el recurso de alzada referente a la negativa de decretar la prueba testimonial, en razón a que los testigos son quienes gestionan este tipo de trámites y reconocen el tratamiento que se le da a los empleados públicos en la entidad demandada a efecto del reconocimiento de las pensiones, como la prestación económica periódica que se debate en este proceso; que el objeto de la litis gravita en determinar la calidad de empleado público o trabajador oficial de la parte demandante, y ello es lo que permitirá al despacho inferir si es beneficiario o no de la convención colectiva, y por consiguiente, con ello se puede establecer si hay lugar a modificar la resolución que le reconoció la pensión al demandante.

1.7 Trámite de Segunda Instancia. El recurso de apelación fue admitido por ésta Corporación el 05 de junio de 2023 (carp. 02, doc. 02), y mediante proveído del 21 de junio de 2023 se corrió traslado a las partes para que, de conformidad con lo previsto en el artículo 13 de la ley 2213 de 2022, presentaran alegatos de conclusión por escrito, de estimarlo

del caso, siendo que oportunamente EMVARIAS S.A. ESP presentó alegatos de conclusión en solicitud de que se revoque el auto denegatorio de la prueba testimonial, para en su lugar, acceder a la misma.

2. ANÁLISIS DE LA SALA

2.1 Apelación, y principio de consonancia. Surtido el trámite en esta instancia, sin observar causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por el extremo litigioso por pasiva EMVARIAS S.A. ESP, advirtiéndose que de conformidad con el principio de consonancia consagrado en el artículo 66A del CPTSS, el estudio del auto impugnado se limitará a los puntos de inconformidad materia de alzada.

2.2 Problema Jurídico. El punto neural de debate en la presente Litis se contrae a determinar si ¿se equivocó la Juez de primer grado al negar la prueba testimonial solicitada por la parte demandada, por considerar innecesaria su práctica?

2.3 Tesis de la Sala. La Sala confirmará la decisión de primer grado, con apoyatura en que no es procedente el decreto de la prueba testimonial solicitada por la parte demandada, ya que el asunto objeto de debate se circunscribe a un tema que es de puro derecho y que se puede resolver con los presupuestos fácticos y jurídicos circunstantes en el expediente.

2.4 Prueba testimonial. Sea lo primero indicar que el auto que deniegue el decreto o práctica de una prueba es apelable en los términos del numeral 4° del artículo 65 del CPT y de la SS.

Para decidir sobre la legalidad de la providencia impugnada, mediante la cual se negó la prueba testimonial pedida por la demandada; recuerda la Sala que el decreto de pruebas es una facultad establecida en cabeza del juez como director del proceso, y quien tiene la potestad de negar o no su decreto, así como dirigir su práctica, con miras a encontrar la verdad real de los hechos, y con el límite de la protección de los derechos de defensa y debido proceso de los extremos litigiosos.

Dicha potestad, se materializa con el ejercicio del poder directivo del Juez (artículo 48 del Código de Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social), el deber de intermediación en la

práctica de las pruebas (artículo 52 del mismo compendio), y en la facultad de rechazar pruebas y diligencias innecesarias, impertinentes e inconducentes (artículo 53 ídem).

Respecto del decreto de las pruebas, debe tenerse en cuenta que este poder del juez se expresa de dos formas: i) cuando decreta o niega las pruebas que solicitan las partes al considerar que son o no necesarias dentro del proceso, y ii) cuando de oficio ordena la práctica de éstas, por considerarlas útiles para el completo esclarecimiento de los hechos.

En el caso de autos, la juzgadora de conocimiento, en audiencia celebrada el 20 de abril de 2023, negó la prueba de testimonio solicitada por la demandada, tras advertir que es innecesaria, dado que con los demás elementos probatorios es posible dar solución a los problemas jurídicos planteados en la contienda procesal. En tal sentido, la Sala antela que se debe confirmar dicha decisión, ya que el medio de convicción solicitado por la parte demandada y no decretado por la Juzgadora de primer grado, resulta superfluo para resolver las pretensiones de la demanda, en tanto en cuanto, los demás medios probatorios que militan en el proceso resultan suficientes para la verificación o esclarecimiento de los hechos objeto de controversia, toda vez que son aptos para la resolución de las peticiones de la demanda, sin que haya necesidad, entonces, de practicar la prueba testimonial, máxime si lo que pretende la entidad demandada con su práctica no es esclarecer los hechos, sino que los testigos constaten que dentro de sus funciones *“tramitan este tipo de situaciones y conocen el reconocimiento (sic) y calidad que se le da a los empleados públicos de la entidad demandada a efecto del reconocimiento de las pensiones”*, es decir, requiere que se practique una prueba testimonial para verificar el procedimiento administrativo interno de la entidad, cuando el debate que trae la parte demandante a la jurisdicción está alejado de aquel, ya que en esencia se trata de establecer si el actor es o no beneficiario de una convención colectiva de trabajo y si le asiste o no derecho a una prestación pensional en calidad de trabajador oficial.

Y es que, contrario a lo esgrimido por la censura, la práctica de otras pruebas resulta necesaria cuando el objeto guarda correspondencia a lo debatido e incide en lo pretendido, siempre que no existan dentro del proceso elementos de convicción que permitan al juzgador proferir el fallo que en derecho corresponda. De ahí, que el juzgador se encuentra facultado para dirigir el proceso, como también para rechazar la práctica de pruebas y diligencias inconducentes o superfluas en relación con el objeto del pleito,

previniendo un gasto inútil de tiempo y trabajo, como bien se hizo en este asunto específico.

Por lo anterior y pese a que la recurrente considere que la práctica de la prueba denegada es necesaria para establecer si hay lugar a modificar la resolución que reconoció la prestación como empleado público y que ahora pretende sea cambiada a la luz de lo establecido en la Convención Colectiva aplicable para los trabajadores oficiales; no obstante, para la Sala, tal argumento resulta insuficiente para revocar la decisión impugnada, por cuanto las probanzas decretadas y practicadas dentro del presente asunto en cuestión bastan para proferir decisión de fondo, además de que la discusión gira en torno de la aplicación o no de una convención colectiva, aspecto que tal como lo dilucidó la a quo, es de puro derecho, y por lo tanto, resulta superflua la prueba testimonial solicitada.

En consecuencia, le asiste razón a la *a quo* al negar la prueba reseñada, pues deviene innecesaria frente al tema de derecho debatido, atendiendo, tanto más cuanto que, además obran las documentales allegadas al expediente, por lo cual se impone la confirmación del auto recurrido.

3. Costas. Sin costas en esta instancia por no haberse causado, en la medida de su no comprobación.

4. DECISION

En mérito de lo expuesto el **TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLIN**, Sala Quinta de Decisión Laboral,


RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR el auto del 20 de abril de 2023 por el Juzgado Doce Laboral del Circuito de Medellín, según y conforme la parte considerativa de este proveído.


SEGUNDO: SIN COSTAS en esta instancia.

Lo resuelto se notifica **POR ESTADOS**, en los términos previstos en el artículo 41 literal c) del estatuto instrumental laboral.

Déjese copia digital de lo decidido en la Secretaría de la Sala, previa anotación en el registro respectivo, y **DEVUÉLVASE** el expediente al juzgado de origen.


VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO
Magistrado Ponente


CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES
Magistrado


SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE
Magistrada

CONSTANCIA SECRETARIAL

Se deja constancia de que las anteriores firmas corresponden a las firmas originales de los magistrados que integran la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Medellín.


RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
Secretario

**LA SECRETARIA DE LA SALA
LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR
DE MEDELLÍN CERTIFICA:**

Que esta providencia fue notificada en los
ESTADOS n.º 130, fijados en la
secretaría del Tribunal, hoy 31 de julio de
2023 a las 08:00am, los cuales pueden
ser consultados en
["Publicación de Estados Electrónicos SL-
TSM"](#)

RUBEN DARIO LOPEZ BURGOS
Secretario